

## **RESPONSABILIDAD PERSONAL, DAÑO Y MEDIO AMBIENTE**

**Arturo Fontaine Talavera**

En este artículo se analizan los derechos de propiedad en cuanto modos de canalizar los efectos de la acción, de manera que recaigan sobre los responsables de ella. En materias del medio ambiente se recomienda, en primer lugar, el perfeccionamiento de los procedimientos para definir derechos privados. Luego se determina un área de acción para el Estado, cuando bienes valorados por su mera existencia pueden sufrir un daño irreversible.

**Q**uisiera proponer lo siguiente: las instituciones son modos de adoptar decisiones. La tradición de las libertades plantea un conjunto de reglas destinadas a hacer posibles las responsabilidades individuales. El principio ético rector es la responsabilidad personal.

La definición de derechos es un modo de hacer a los individuos responsables de sus actos y decisiones. En otras palabras, a través de los derechos se establecen ciertos límites en virtud de los cuales las personas

---

ARTURO FONTAINE TALAVERA. Licenciado en Filosofía, Universidad de Chile, M. A. y M. Phil. en Filosofía, Universidad de Columbia. Profesor del Teoría Política en el Instituto de Ciencia Política, Universidad Católica de Chile. Director del Centro de Estudios Públicos.

sobrellevan las consecuencias de sus actos y decisiones. La falta de derechos personales efectivos conduce a la indefinición de las responsabilidades. Pienso que el socialismo real experimentado, por ejemplo, en la ex Unión Soviética, a raíz de la revolución de octubre de 1917, condujo precisamente a institucionalizar la irresponsabilidad política y económica.

Si la institución del *habeas corpus* y otros derechos procesales no operan, las autoridades no asumen las consecuencias de ordenar arrestos arbitrarios. Por otra parte, en tal caso, los ciudadanos no reciben los efectos de su conducta justa. El *habeas corpus* le impone a la autoridad la obligación de justificar los arrestos que ordene en un breve plazo y ante jueces independientes. Se trata de un mecanismo de protección de todos los derechos, que surgió para hacer efectivas las responsabilidades que le caben a la autoridad en el ejercicio de su poder coactivo. En ausencia de esta institución procesal, quienes ejercen el poder quedan en una situación de virtual impunidad. Este mecanismo es capital para la tradición de las libertades. Bruno Leoni ha sostenido que no es posible entender el significado político de la palabra *freedom* en la Inglaterra de los tiempos modernos sin referirse a conceptos tales como el *habeas corpus*.<sup>1</sup>

La definición de derechos de propiedad es también una regla o conjunto de reglas que encauzan los efectos de la acción humana de modo que recaigan sobre sus responsables. La falta de propiedad privada dispersa los resultados de los actos de las personas y hace imposible vincularlos con quienes los realizaron. Posiblemente Aristóteles tenía algo así en mente cuando, argumentando en contra del comunismo de Platón, sostiene que al “tener cada cual un interés distinto, los hombres no tendrán tantos conflictos y progresarán porque cada cual se ocupará de lo suyo”.<sup>2</sup> Tomás de Aquino es más preciso cuando afirma que “todo hombre es más cuidadoso en procurarse lo que es para sí mismo que lo que es común a muchos o a todos, puesto que cada uno evitará trabajar y dejará a otro lo que concierne a la comunidad (...)”.<sup>3</sup>

Tomás de Aquino pone el acento en el *cuidado* que el propietario dedica a lo suyo. Desde luego, se pone más cuidado en lo propio que en lo común, afirma. En seguida alude a la delimitación de áreas de responsabilidad. Hay más orden, sostiene, si cada individuo tiene a su cargo el cuidado de algo definido. En cambio, se genera confusión si las personas se ocupan

---

<sup>1</sup> Véase Bruno Leoni, *Freedom and the Law* (Los Angeles: Nash Publishing, 1972), p. 34.

<sup>2</sup> Aristóteles, *La política*, Libro II, cap. 5, 1263a 25 y ss.

<sup>3</sup> Santo Tomás de Aquino, *Summa teológica*, II-II, Q. 66, a. 2.

de objetos indeterminados. A raíz de ello aumentan los conflictos, mientras que la división de la propiedad promueve la paz. Aristóteles es de la misma opinión cuando manifiesta que “en verdad, siempre hay dificultades cuando la gente vive en común y tienen todas sus relaciones en común, pero en particular cuando tienen en común su propiedad”.<sup>4</sup>

Sabemos que el proyecto de Marx suponía revitalizar estas ideas, vale decir, conferirles una validez histórica pasajera. Estoy convencido de que setenta años de “avance” hacia el comunismo demuestran la plena validez de estos viejos conceptos, al menos para la etapa del socialismo previa al advenimiento de la sociedad sin clases. Volveré sobre este punto más adelante.

La propiedad es, para Hume, un artificio de la especie que ha surgido para afrontar el fenómeno de la escasez. Hume señala que en las imágenes poéticas de la Edad de Oro no hay propiedad privada. “Los poetas se dieron cuenta fácilmente de que si cada hombre tuviera una amable consideración para con los demás, o si la naturaleza supiera todas nuestras necesidades o deseos, no podrían originarse ya los conflictos de intereses que supone la justicia ni serían ya necesarias todas esas limitaciones de propiedad y posesión que al presente usan los hombres”.<sup>5</sup> Pero en la Edad de Oro “la Tierra mana leche y miel”, es decir, no hay escasez. No hay propiedad privada de lo que no es escaso. Y un ejemplo que dará Hume será el aire. Otro será el pájaro en vuelo. En cambio, sí hay propiedad privada del pájaro abatido.

Cuando Marx propone en la *Ideología alemana* la sociedad sin clases, la sociedad comunista, la imagina sin propiedad privada y sin Estado, pero también sin escasez. Tiene en mente un “salto cualitativo” que Engels llamará en el *Anti-Dühring*, el salto del “reino de la necesidad al reino de la libertad”. Visiones sobre la propiedad como las de Aristóteles, Tomás de Aquino o Hume tenían para Marx sólo un valor histórico. Tal vez sea así, pero la experiencia —desde que Marx escribió a esta parte— no permite vislumbrar ese aumento de las fuerzas productivas que él esperaba. Todo parece indicar que la escasez es un fenómeno intrínseco al ser humano e íntimamente ligado a su finitud.

Hume vincula la noción de propiedad con la de intercambio. En efecto, no basta la definición de derecho de propiedad sino también el establecimiento de reglas para el intercambio. Sólo entonces se desarro-

---

<sup>4</sup> Aristóteles, *op. cit.*, Libro II, cap. 5, 1263a 15 y ss.

<sup>5</sup> David Hume, *A Treatise of Human Nature*, Libro III, Sección II (Oxford University Press, 1978), p. 494.

llan, por ejemplo, la división del trabajo y la especialización. Sin transferencia de derechos no hay división del trabajo.

Los “artificios” de la propiedad y el mercado son mecanismos naturales de adaptación de la especie a la escasez. La idea de que el mercado es un orden espontáneo generado por la especie ha sido destacada por Hayek,<sup>6</sup> con el fin de oponerla a la noción de un orden diseñado y manufacturado por alguien en particular o por un grupo iluminado.

A través del mercado la especie ha generado incentivos que, por una parte, racionan los bienes, y, por otra, la inducen a reproducir o crear sustitutos. La especie humana ha logrado reproducirse y multiplicarse como lo ha hecho, es decir, ha logrado sostener un acelerado crecimiento de la población, gracias a su capacidad para reproducir y multiplicar a su vez los medios requeridos para su vida.

Otras especies que se reproducen a sí mismas no han tenido una capacidad análoga para inducir la reproducción de las demás. Es lo que ocurrió con el surgimiento de la agricultura, hecho que, se estima, se produjo entre los sumerios, quienes habitaban hace unos 9.000 años lo que ahora es Irán, cuando la población era aproximadamente 1/1000 de lo que es hoy.<sup>7</sup> Pero todavía en el siglo XVI, en Inglaterra, la mayor parte de la tierra era común. El *enclosure movement* posterior, fuertemente apoyado por los Tudor, fue un proceso de privatización.

La preocupación por el medio ambiente se está transformando en el nuevo horizonte de la praxis humana. Sus efectos se hacen sentir tanto en el comportamiento individual y privado como en las decisiones empresariales, en las políticas de gobierno y de los organismos internacionales. El tema tiene, naturalmente, dimensiones propiamente científicas o ecológicas, pero también económicas y políticas, filosóficas y jurídicas. Más que un tema especial es un trasfondo en función del cual surgen nuevos objetivos y actitudes.

La naturaleza representó para los antiguos aquello a lo que había que arrancarle el sustento y también lo amenazador, el conjunto de fuerzas divinas que era necesario aplacar con sacrificios propiciatorios. Con el

---

<sup>6</sup> Véase F. A. Hayek, *The Fatal Conceit: The Errors of Socialism* (Londres y Chicago: Routledge and Chicago University Press, 1988).

<sup>7</sup> Al respecto, véase Robert Lewin, *Human Evolution* (Nueva York: W. H. Freeman, 1984), p. 96, y L. L. Cavalli-Sforza, “The Impact of Farming on Expansion of Human Population”, en “The Origin and Domestication of Cultivated Plants: Symposium”, C. Barigozzi, ed., *Developments in Agricultural and Managed-Forest Ecology 16*: (Nueva York: Elsevier Science Publishing, 1986), p. 81. Citado por Michael Rothschild en *Bionomics. The Inevitability of Capitalism* (Nueva York: Henry Holt & Company, 1990), p. 6.

romanticismo pasó a encarnar lo bello y lo libre. Pero mantuvo siempre su carácter de entidad independiente del hombre. Y eso es lo que ahora está en crisis. Cunde la idea de que la naturaleza es precaria y requiere del cuidado del hombre. ¿Cómo organizar ese cuidado? Vienen a la mente la imagen bíblica de Noé y la construcción del arca.

Con todo, el problema ecológico de hoy, en su dimensión pública, no es una situación enteramente inédita. En el fondo, lo que está sucediendo es que la especie humana comienza a sentir la presión de la escasez en áreas nuevas: fundamentalmente, el aire y el agua y, consecuentemente, la amenaza de extinción de especies vivas. Y empiezan a surgir restricciones y costos. Esto produce tanta sorpresa y resistencia como la que ha de haberles producido a los cazadores que vieron reducidos sus territorios por la agricultura. Se calcula que en esa época 100 millas cuadradas permitían la subsistencia de aproximadamente 25 cazadores y recolectores. La introducción de la propiedad privada de la tierra y la agricultura les impuso costos, pero permitió un rendimiento inmensamente superior de esa tierra (cerca de 100 veces mayor).

La definición original y la protección consecuente de derechos de propiedad han exigido, desde tiempos ancestrales, el uso de la coerción. En una sociedad en que hay Estado se requiere, entonces, que el agente monopolizador del uso de la fuerza participe en el proceso. Abogar por la determinación de derechos no implica favorecer, de parte del Estado, una actitud pasiva o neutral. En una sociedad donde el Estado es democrático, dicha definición de derechos supone, de un modo u otro, la movilización de la opinión pública.

La contaminación genera un problema recíproco. Si A causa perjuicio (humo, ruido, olor, etc.) a B, y se le prohíbe a A hacerlo (o se le impone un costo), se le ha infligido a su vez un daño a A que debe ser ponderado. Según Coase, el Estado, ya sea a través de sus normas, ya sea por medio de las sentencias de sus tribunales de hecho, sopesa el valor de ambos daños (el causado a B por la contaminación y el causado a A por impedirlo). Esto implica que, desde luego, tanto la norma reguladora como la sentencia imponen costos que deben ser evaluados. “El problema que se enfrenta al abordar acciones que tienen efectos perjudiciales no es simplemente restringir a quienes son responsables de ellas. Lo que tiene que decidirse es si la ganancia al prevenir el daño es mayor que la pérdida que se experimentaría en otra parte como resultado de detener la acción que produce el daño. En un mundo en el cual reordenar los derechos establecidos por el sistema jurídico implica costos, las cortes, en los casos relativos a daños, están, en

efecto, tomando decisiones acerca del problema económico y determinando cómo han de emplearse los recursos”.<sup>8</sup>

Con todo, la reglamentación gubernamental puede conducir a un mejoramiento de la eficacia económica, cuando, “como es normalmente del caso en el perjuicio del humo, un vasto número de personas están implicadas, y en el cual los costos de manejar el problema a través del mercado o de la firma tenderán a ser altos”.<sup>9</sup> La intervención gubernamental se justificará por los elevados costos de la transacción correspondiente.

Para la delimitación de los derechos relativos al uso del medio ambiente (derechos de emisión, por ejemplo) conviene concebir al dueño de un factor de producción como dueño de un “derecho a realizar ciertas acciones físicas”.<sup>10</sup> El dueño de un campo o de una fábrica, por ejemplo, es en verdad el poseedor de “un derecho a llevar a cabo una lista circumscribida de acciones”.<sup>11</sup> Entonces, el derecho a realizar actos que producen efectos negativos —tales como generar humo, ruido, olores, afear el paisaje, etc.— es también un recurso productivo, y eso, como tal, tiene un valor económico que, dados ciertos supuestos, puede ser estimado. Pero restricciones de viabilidad técnica y, en general, los elevados costos de transacción impiden que pueda ser siempre delimitado y transferido como un derecho separado. Sin embargo, los avances tecnológicos de los últimos años han abaratado los costos de transacción. Cabe esperar que en el futuro nuevas tecnologías reforzarán esta tendencia a disminuir los costos de control, monitoreo y transacción.

La determinación de la noción de daño o perjuicio necesariamente implica al Estado. Más precisamente, la fijación de qué cuenta como transgresión de un derecho exige una norma cuyo cumplimiento sea constreñible. Esto vale para todos los derechos. Por ejemplo, ¿qué clase de error vicia un contrato? ¿cuáles son los requisitos para que un acto sexual constituya una violación? De allí la existencia de las leyes y de los jueces.

En materias de contaminación se hace necesario fijar normativamente los niveles de calidad ambiental a partir de los cuales comienzan los daños o los perjuicios relevantes para los efectos legales. Precisamente, uno de los aspectos más interesantes de los estudios de Coase es que demuestran que los jueces llevan a cabo, de hecho, estimaciones de perjuicios en las

---

<sup>8</sup> R. H. Coase, “The Problem of Social Cost”, en *The Journal of Law and Economics*, vol. III, octubre 1960, p. 27. [Traducido al castellano en *Estudios Públicos*, 45 (verano 1992).]

<sup>9</sup> R. H. Coase, *op. cit.*, p. 18.

<sup>10</sup> R. H. Coase, *op. cit.*

<sup>11</sup> R. H. Coase, *op. cit.*

cuales muchas veces están implícitos juicios de valor propios de una evaluación social. En una perspectiva libertaria como la de Rothbard, se critica el enfoque de Coase porque “importa la norma ética de la ‘eficiencia’ y sostiene que los derechos de propiedad debieran asignarse sobre la base de tal eficiencia”,<sup>12</sup> pero no se puede evitar que “los jueces, jurados o árbitros” jueguen un papel importantísimo en la determinación de qué transgrede un derecho y en la estimación del valor del daño o perjuicio.

La cuestión del daño se hace presente desde el momento mismo de la adquisición original de un derecho de propiedad. Como se sabe, tradicionalmente ello siempre entraña la libertad de excluir a los que no son titulares del derecho en cuestión de su uso, goce y/o disposición. ¿Qué condiciones deben darse para que sea legítima la apropiación primera de un bien? Una corvina que nada libremente en el mar no es de alguien en particular. Pero esa misma corvina, minutos después, tiene un dueño. ¿Por qué? Ha mordido un anzuelo. El pescador adquirió un derecho sobre el pez al “mezclar con él su trabajo”, para usar la célebre expresión de Locke. La actividad del individuo marca los objetos y los separa del lote común haciéndolos suyos. Esta es la regla tradicional. La proscripción, pasado un tiempo, de los derechos de terceros respecto de ese bien y la consiguiente consolidación del derecho del poseedor de buena fe, presente en el derecho romano y sus derivados, podría ser una expresión jurídica de este principio fundamental.

Sin embargo, Locke, además de sostener que el bien no ha de tener dueño, agregó un requisito más exigente, cuya interpretación ha dado origen a una larga y compleja controversia. Esta salvedad lockeana dice que la apropiación de un objeto será legítima “al menos cuando de eso mismo queda suficiente cantidad, y de igual calidad, para el uso de los demás”.<sup>13</sup>

El criterio de Locke es que, para ser moralmente legítimo, el acto de la apropiación original no ha de emperorar la situación de los demás. La pregunta es, entonces, cómo definir ese daño que se inflige a los demás, quienes ya no tienen la libertad de apropiarse de ese bien.

Si yo me apropio de un balde con agua del Océano Pacífico para que juegue un niño, ¿he perjudicado a los demás? Si yo me apropio de la última pareja de corvinas del Océano Pacífico, ¿he causado un perjuicio a los demás? Según Nozick, no puede interpretarse que la mera pérdida de

---

<sup>12</sup> Murray N. Rothbard, “Law, Property Rights, and Air Pollution”, en Walter E. Block, ed., *Economics and the Environment: A Reconciliation* (Canadá: The Fraser Institute, 1989), p. 236.

<sup>13</sup> John Locke, *The Second Treatise of Government*, cap. V, sección 27.

libertad para apropiarse de ese bien específico constituye un daño suficiente como para invalidar la adquisición original. A su entender, los beneficios sociales que acarrea el establecimiento del sistema de propiedad y de transferencias libremente consentidas más que compensa la pérdida de la libertad de apropiación que sufren los que no ejercieron ese derecho. Con todo, admite la posibilidad de indemnización. Según Hume “muchas veces ocurre que el derecho de la posesión primera se va desvaneciendo con el tiempo, de modo que resulta imposible dar solución a muchas controversias que pueden producirse a causa de ello. Lo que se origina naturalmente en este caso es una larga posesión, o prescripción, que confiere a la persona suficiente título de propiedad sobre cualquier cosa que posea”.<sup>14</sup>

El asunto resulta difícil y no es este el sitio para detenerse en él, salvo en cuanto dice relación con el medio ambiente. Toda apropiación original de bienes comunes debe tomar en cuenta los perjuicios que causa. Tanto la apropiación original de bienes como el ejercicio de los derechos adquiridos de explotación de los recursos suelen implicar la generación de daños ambientales a terceros, perjuicios, que, en principio, debieran ser compensados.

Ahora bien, decir “daño o perjuicio” definido por la norma jurídica o por la resolución judicial o administrativa implica referirse a valoraciones de fundamento ético y estético. No es posible aquilatar un perjuicio sino desde el interior de un mundo cultural, en cuya trama de lenguajes, hábitos y prácticas se trasuntan esas metas y valores. La cifra monetaria asociada a la valoración es una aproximación —imperfecta, por cierto— al valor de un bien medido en función de cuánto el sujeto está dispuesto a dar a cambio para obtenerlo o conservarlo.

En el análisis del valor económico del daño ambiental, la literatura distingue el “valor de uso” del “valor intrínseco o de existencia”.<sup>15</sup> En el primer caso se trata de estimar el valor de los beneficios que acarrea el uso del medio ambiente. Estos beneficios se derivan de la explotación productiva del recurso, pero también de su empleo para fines recreativos o estéticos. El leñador, el ganadero, el cazador, el excursionista, el pescador y el aficionado a los paisajes naturales derivan beneficios del uso de una montaña. Con frecuencia se distingue entre el valor de uso actual y el potencial u opcional. En este último caso se piensa en la situación de quien estaría

---

<sup>14</sup> David Hume, *op. cit.*, p. 507.

<sup>15</sup> David W. Pearce y R. Kerry Turner, “Measuring Environmental Damage”, en *Economics of Natural Resources and the Environment* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1990), pp. 120 y ss.



dispuesto a dar algo a cambio de que su derecho al uso del recurso se mantenga vigente, aunque no lo haya ejercido todavía. Por lo tanto, el valor total de su uso equivale al valor de uso actual más el valor de la opción al uso.

El “valor intrínseco” es el que se asigna a algo por el mero hecho de existir y aunque no se lo emplee para algo en particular, salvo para saber que existe. Ello, por cierto, no impide apreciar a algunos entes más que a otros en función de sus atributos. La gente quiere proteger las ballenas porque piensa que su extinción sería una pérdida *per se*, aunque nunca vaya a hacer uso de ellas para algo en particular. Su existencia en el planeta es considerada un valor. Es cierto que hay gente que quiere verlas en fotografías o películas, pero parece que se concede valor a que existan independientemente de que se las quiera observar o contemplar. En el lago de Loch-Ness, en Escocia, la leyenda dice que habita un plesiosaurio. Si descubrimos que efectivamente ‘Nessie’, como se le llama, está ahí, pero que la fotografía y filme le dañan mortalmente, aún así habría gente dispuesta a proteger su existencia. Tal vez podría decirse que se aprecia la opción a contemplarlo que su existencia permite. En tal caso, el valor intrínseco quedaría subsumido bajo el concepto de valor opcional. Con todo, la idea es que la actitud original valora algo simplemente porque es, en oposición a valorarla porque me sirve. Por lo tanto, el valor económico total viene a ser la suma del valor de uso (actual y potencial) y el valor intrínseco o de existencia.

Como el valor de un bien está ligado a su escasez, al evaluar el daño ambiental hay que considerar si es o no irreversible, por ejemplo, si la explotación acarrea o no la extinción de una especie muy apreciada, la destrucción de un lugar natural de excepcional belleza, o de selvas que, como la amazónica, son de importancia ecológica, puesto que inciden en la mantención de las condiciones climáticas del planeta y no pueden ser recreadas a voluntad. ¿Cuánto vale, por ejemplo, la preservación del último alerce? Si la explotación del recurso es irreversible, los beneficios de su conservación se pierden para siempre. Ello representa un sacrificio irreparable de calidad de vida. En general, los economistas adoptan una actitud cautelosa y conservadora ante proyectos de desarrollo que importan daños ecológicos irreparables. El enfoque de Krutilla y Fisher estima que:

i) los beneficios de la preservación que se pierden deben ser considerados como parte de los costos del proyecto de desarrollo;

ii) los beneficios de la preservación se incrementan durante el tiempo, debido al efecto de precios relativos (el medio ambiente natural se hará progresivamente más escaso);

- iii) los beneficios del proyecto de desarrollo deben tener un descuento adicional por “obsolescencia tecnológica” esperada, y
- iv) el valor presente de un proyecto puede ser muy sensible al precio relativo de la preservación y a la obsolescencia tecnológica.<sup>16</sup>

Esta actitud cautelosa se corresponde con el hecho de que no ocurre, en estas situaciones, que la institución de la propiedad privada remedie la escasez. A esto se añade una preocupación por las generaciones futuras, para las cuales la irreversibilidad de decisiones de inversión tomadas hoy puede resultar costosísima por los factores señalados, *i.e.* aumento del valor relativo de lo natural por su escasez y obsolescencia tecnológica de la inversión.

La aplicación de estos criterios se complica, desde luego, por lo imperfecta que resulta la traducción de ciertas valoraciones a términos pecuniarios, sobre todo en presencia de consideraciones intergeneracionales de largo plazo. Pero el problema mayor, creo, es la ignorancia que tenemos, en general, acerca de los efectos ecológicos de la actividad humana en el planeta. En verdad, no parece haber certezas científicas ni suficiente experiencia acumulada necesarias, por ejemplo, para determinar el grado en que el medio ambiente natural es requerido por el sistema económico para sustentar el desarrollo. La ponderación del daño o perjuicio ambiental es incierta: “No comprendemos plenamente cómo funcionan los gases en la atmósfera y en la estratosfera; la química de la lluvia ácida se está desarrollando; el papel de las corrientes oceánicas en la determinación del clima está en debate, y el modo en que los bosques naturales protegen la tierra, los ríos y los microclimas requiere aún de investigación”.<sup>17</sup>

Mientras hay autores que miran con preocupación el crecimiento, por su efecto en el agotamiento de los recursos naturales y la disminución de la calidad de vida, hay otros, como Bernstam, que sostienen que el aumento cada vez mayor de la productividad por sobre el aumento de la población es la única manera de desarrollarse en armonía con el medio ambiente. Porque, todo lo demás constante, a mayor población, mayor uso de recursos y mayores descargas al medio ambiente; y a mayor productividad de los recursos, menor uso de recursos y menor polución. “La carrera última, entonces, es entre el crecimiento de la población y el crecimiento de la productividad de los recursos”.<sup>18</sup> Si Bernstam está en lo cierto, las

---

<sup>16</sup> David W. Pearce y R. Kerry Turner, *op. cit.*, p. 316.

<sup>17</sup> David W. Pearce y R. Kerry Turner, *op. cit.*, p. 50

<sup>18</sup> Mikhail S. Bernstam, *The Wealth of Nations and the Environment* (Londres: Institute of Economic Affairs, 1991), p. 32.

políticas más afines al medio ambiente serían aquellas que fomentan la productividad. No obstante, esto es así a nivel global, pero no necesariamente a nivel local. A quien pierde la vista de la cordillera desde su casa debido a un edificio, ¿compensa el aumento de productividad de la economía del país que, se supone, ello acarrea?

La incertidumbre científica produce dos tipos de actitudes, ambas cautelosas y conservadoras, pero en sentido inverso. La ignorancia, por un lado, hace que algunos tiendan a mantener la reserva de recursos naturales constante en prevención de disminuciones que pudieran causar trastornos costosos e irreversibles. “Ahora, en una esfera de decisiones más amplia, los costos de errar son tan exorbitantes que tenemos que actuar sobre la base sólo de la teoría, es decir, de la sola predicción. La reputación de la predicción científica necesita acrecentarse. Pero eso puede ocurrir, paradójicamente, sólo si los científicos desconocen la certeza y precisión sobre la cual normalmente insisten. Por encima de todo, se debe aprender a actuar con decisión para prevenir peligros pronosticados, aun sabiendo que es probable que nunca lleguen a materializarse. Debemos tomar medidas, por decirlo de alguna forma, para proteger nuestra ignorancia. Hay peligros que podemos estar seguros de evitar sólo al costo de no llegar a saber nunca con certeza que eran reales”.<sup>19</sup>

A otros, la ignorancia los inclina a mantener la eficiencia de los mercados competitivos en prevención de caídas de la productividad que, en presencia de aumentos de la población, pudieran redundar en fuertes descensos en el nivel de bienestar y en incrementos significativos de deterioro ambiental. No se debe “sucumbir al argumento formulado por ecologistas políticos en el sentido de que las decisiones deben tomarse adelantándose a la comprensión del problema ‘por si acaso’. Esta vieja Tierra ha experimentado por largo tiempo drásticos cambios climáticos sin ayuda alguna de los humanos. Ella continuará cambiando. La Tierra jamás ha sido estable o permanecido sin cambios por mucho tiempo (...). Los humanos no pueden vivir en la Tierra sin alterarla y sin usar sus recursos naturales. Nuestra responsabilidad es ser buenos administradores del medio ambiente y recordar que un jardín bien cuidado es mejor que una reserva forestal descuidada”.<sup>20</sup> Según Anderson y Leal, el enfoque del libre mercado respecto del medio ambiente “enfatisa la importancia de los procesos de

---

<sup>19</sup> Véase Jonathan Schell, “Our Fragile Earth”, *Discover* (octubre 1987), p. 47. Citado por Dixy Lee Ray y Lou Guzzo, en *Trashing the Planet*, (Washington, D.C.: Regnery Gateway, 1990), cap. 12, p. 167.

<sup>20</sup> Dixy Lee Ray y Lou Guzzo, *op. cit.*, p.171.

mercado en la determinación de cantidades óptimas de uso de los recursos. Sólo cuando los derechos están bien definidos, son constreñibles y transferibles, los individuos afrontarán, en su interés propio, las permutas (*trade-offs*) inherentes a un mundo de escasez. En la medida que los empresarios se muevan para llenar nichos de rentabilidad, los precios reflejarán los valores que les asignamos a los recursos y al medio ambiente”.<sup>21</sup>

Quizás, la conclusión básica de lo anterior sea que es necesario aumentar el conocimiento del ecosistema para poder perfeccionar la evaluación del daño ecológico. Mientras tanto, se está expuesto a cometer errores mayúsculos en un sentido o en otro. Buena parte del tono alarmista e intolerante de muchos planteamientos, así como de las discrepancias, se explica por la incertidumbre que hay respecto de estas materias.

El objetivo del movimiento ecológico debiera ser la creación de mecanismos institucionales de asignación de responsabilidades en el área de estos bienes escasos, con miras a que las consecuencias de las actividades contaminantes se determinen y recaigan sobre quien las realiza. En ausencia de estos mecanismos, esas consecuencias se diluyen entre todos, es decir, no hay responsables concretos y, por consiguiente, no hay métodos ni de ahorro ni de producción y sustitución de los bienes escasos. Es lo que ocurre cada vez que falta la institución de la propiedad privada.

Por cierto hay bienes que no son susceptibles de apropiación individual. Como señalara Adam Smith, “la tercera y última obligación del soberano y del Estado es la de establecer y sostener aquellas instituciones y obras públicas que, aun siendo ventajosas en sumo grado a toda la sociedad, son, no obstante, de tal naturaleza que la utilidad nunca podría recompensar su costo a un individuo o a un pequeño número de ellos, y, por lo mismo, no debe esperarse que éstos se aventuren a fundarlas ni a mantenerlas. El desempeño de esta obligación requiere también distintos grados de gastos en los diferentes períodos de la sociedad”.<sup>22</sup> Con frecuencia los costos de medición y control necesarios para el debido resguardo de los derechos y de su transferencia son, en materias ambientales, sumamente elevados. Es posible sostener que la preservación y conservación de ciertos bosques, especies y paisajes requieren la delimitación de áreas o parques de conservación de la vida natural. Pero ello no implica que su administra-

---

<sup>21</sup> Terry L. Anderson y Donald R. Leal, *Free Market Environmentalism* (San Francisco: Pacific Research Institute for Public Policy, Westview Press, 1991), p. 22.

<sup>22</sup> Adam Smith, *The Wealth of Nations* (Nueva York: Modern Library Edition, 1965 [edición anterior 1937]), Libro V, Parte III, p. 681.

ción necesariamente deba ser estatal. Es posible que fundaciones privadas sin fines de lucro y especializadas estén mejor capacitadas que la burocracia estatal para desempeñar las funciones de preservación del ambiente natural.

Con todo, es un hecho que buena parte —si no la mayor— del movimiento ecológico se presenta como meramente preservacionista, ajena a la propiedad y al mercado, distante del desarrollo. Hay, sin duda, elementos utópicos y cierta fibra religiosa en algunas de sus manifestaciones.

En verdad, lo que está en juego son valores que atañen, por una parte, a la subsistencia misma de la especie, y, por otra, a ciertas intuiciones muy arraigadas acerca de lo que es una vida humana, lo que es la felicidad y su vinculación con la vida natural. De modo que hay aquí envueltos valores muy profundos que inciden en la valoración económica de ciertos bienes, como la vivienda, por ejemplo. Es indudable que el ambiente (vecindad, paisaje, aire puro, higiene) es una variable clave en el valor de la propiedad inmobiliaria. Esto indica que la escasez ya ha sido percibida. La cuestión ecológica no se desvanecerá como se esfuma un mal sueño.

El movimiento ecológico puede llevar, y de hecho en parte ha llevado, al establecimiento de métodos centralizados de orden y control. Sabemos que estos mecanismos fallan y corresponden a lo que Marx llamó “el modo de producción asiático”. Son mecanismos sumamente costosos. Hoy representarían una involución.

El objetivo político del movimiento ecológico debe ser la generación de un marco jurídico que consagre, para usar la frase de Kant, “una libertad compatible e igual con la libertad de los demás”, pero donde “los demás” incluya a las generaciones futuras. Se le pondrá así un costo a la contaminación. Hay que crear instituciones —derechos de propiedad y derechos de transferencia de ellos, fundamentalmente— que establezcan incentivos y costos pecuniarios, y permitan así incorporar nuestro interés a los intereses de las generaciones futuras. Pero todo ello requiere acrecentar nuestro conocimiento científico del ecosistema y el conocimiento práctico de manejo ambiental.

La ponderación del daño ecológico que determinen las normas jurídicas y su aplicación no puede ser solamente el resultado del desarrollo científico y del cálculo. Las valoraciones muchas veces no son explícitas, no corresponden a una decisión voluntaria, sino que se nos revelan en la praxis. No es fácil justificar ni reconstruir los motivos que inducen a actuar de un modo u otro. Ello porque la decisión concreta y particular no se deduce o infiere de reglas previas; no es el producto de un cálculo expreso.

Este es el problema de la deliberación práctica que caracteriza a la virtud que Aristóteles llamaba *phrónesis* y pasó a la lengua latina como *prudentia*. La *phrónesis* es el hábito rector de la acción efectiva o virtuosa. En una perspectiva contemporánea, este tipo de problema está en el meollo de la crítica que Hubert Dreyfus, filosofando a partir de Heidegger, formula al proyecto de construir una inteligencia artificial. Esto supone derivar la decisión correcta de reglas y procedimientos formales que podrían estar en el programa de una máquina. Pero quien domina una habilidad, arte u oficio (Dreyfus lo llama “el experto”) no hace cálculos para comparar alternativas y, si los hace, no son determinantes: “El experto simplemente no sigue reglas”.<sup>23</sup> Los buenos ajedrecistas no tienen tiempo para hacer cálculos completos. A la velocidad con que juegan “se basan casi exclusivamente en la intuición y casi nada en el análisis y la comparación de alternativas”.<sup>24</sup> Aquí la experiencia de situaciones particulares desempeña un papel crucial al ir creando lo que los escolásticos llamaban una “disposición habitual”.

En el área del medio ambiente están recién desarrollándose las técnicas y exploraciones que permitirán a través de errores y aciertos acumular experiencias y fundar un manejo ambiental adecuado. La cuestión ecológica es un reto a la sabiduría práctica de los líderes, la misma huidiza y particular sabiduría de lo concreto que le enseñó a Noé a construir su arca. □

---

<sup>23</sup> Hubert L. Dreyfus, “De Sócrates a los sistemas expertos: Los límites y peligros de la racionalidad calculatoria”, *Estudios Públicos*, 46 (otoño 1992). Véase, asimismo, Hubert L. Dreyfus y Stuart E. Dreyfus, *Mind Over Machine* (Nueva York: The Free Press, 1986).

<sup>24</sup> Hubert L. Dreyfus, *op. cit.*